



H. CONGRESO DEL
ESTADO DE YUCATÁN
LXII Legislatura 2018-2021



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

La suscrita, Diputada Kathia María Bolio Pinelo integrante de la Fracción Legislativa del Partido Acción Nacional de esta Sexagésima Segunda Legislatura, con fundamento en los artículos 30 fracción V y 35 fracción I, de la Constitución Política; artículos 16 y 22 Fracción VI de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, así como de los artículos 68, 82 fracción IV del Reglamento del Poder Legislativo, todos del Estado de Yucatán, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente: **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS, SE ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES Y PÁRRAFOS DE LA LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE YUCATÁN.** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) 2020, durante el año 2019, el 29.2% de los hogares del país tuvo al menos una víctima de delito, haciendo un total aproximadamente de 22.3 millones de mexicanas y mexicanos mayores de 18 años, es decir 24,849 víctimas por cada cien mil habitantes.

Es necesario recalcar, que México vive en la actualidad uno de sus peores momentos en materia de seguridad, problemática que si bien es nacional, su gravedad no debe ser generalizada porque no es igual en todos los estados, ya que algunos como Yucatán conservan índices delictivos bajos, sin embargo, sí se comenten algunos delitos, que causan en las víctimas además de un daño patrimonial, emocional, físico, moral y hasta la pérdida de la vida, momentos de incertidumbre, miedo, inseguridad y demás dificultades que se vuelven interminables en la búsqueda de la justicia y la reparación del daño, como por ejemplo, la falta de sensibilidad y empatía de quienes tienen la obligación de brindar una atención pronta y eficaz, el desinterés y la equivocada aplicación de medidas de protección que resultan insuficientes, también la poca seriedad y profesionalismo de quienes tienen la responsabilidad de investigar el delito cometido, que en muchas

ocasiones cometen negligencias que se traducen en una afectación directa hacia la víctimas y un beneficio para los agresores, permitiéndoles inclusive salir en libertad quedando así el delito impune; cabe señalar que estas circunstancias no son nuevas, han existido desde hace mucho tiempo y se siguen prolongando, afectando principalmente a las personas que pertenecen a grupos vulnerables, como personas indígenas, personas con orientación sexual diferente, mujeres, personas migrantes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, siendo las mujeres específicamente las que a menudo son afectadas y revictimizadas, desde el momento en que acuden con la autoridad para darle a conocer los hechos cometidos en su contra considerados como delito.

Las mujeres que son víctimas de delitos sexuales, lesiones, violencia familiar, violencia de género o tentativa de feminicidio, requieren una máxima protección por parte de las autoridades, esto con la finalidad de salvaguardar su integridad y su vida que se pone en riesgo, así como la de sus familiares que pasan a ser víctimas indirectas ante las posibles represalias de sus agresores, que de no otorgarse estas medidas de protección, ocasionan que lo que inicio como un delito termine siendo otro, causando desafortunadamente un daño irreversible para la víctima.

Con la presente iniciativa, pretendo que se le otorgue a las mujeres yucatecas víctimas de delitos sexuales, lesiones, violencia familiar, violencia de género o tentativa de feminicidio, una máxima protección por parte de las autoridades, esto con la finalidad de salvaguardar su integridad y su vida que se pone en riesgo, así como la de sus familiares que pasan a ser víctimas indirectas ante las posibles represalias de sus agresores, que de no otorgarse estas medidas de protección, ocasionan que lo que inicio como un delito termine siendo otro, causando desafortunadamente un daño irreversible para las mujeres víctimas.

La medida de máxima protección que propongo para las mujeres, consiste en otorgar un dispositivo que puede ser un reloj o dije, con el que se monitorea las 24 horas del día a las mujeres que han denunciado a sus agresores, y que tienen riesgo medio y alto de ser víctimas de feminicidio u otros delitos, estos aparatos ya se aplican en México y han generado resultados excepcionales, se han disminuido delitos como el feminicidio, estas herramientas de seguridad cuentan con un micrófono para hablar con la policía en el momento de la agresión y la misma policía escucha todo lo que sucede en ese momento, también cuenta con un geolocalizador que permite que la policía llegue al lugar de los hechos en poco tiempo solamente con apretar un botón que se le llama, botón de pánico, toda esta tecnología es operada desde un centro de comando, que en Yucatán pudiera ser el C5i que se encuentra en construcción, que otorgará una respuesta oportuna, un análisis preciso y efectivo sobre actos delictivos o situaciones de riesgo en las que las mujeres se encuentren.

Otro dato importante que señala la encuesta ENVIPE 2020, es con respecto a los delitos sexuales, donde las mujeres son más vulneradas al contabilizarse 9 delitos sexuales cometidos a mujeres por cada delito sexual cometido a hombres.

La **declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder**, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, define el concepto de víctimas como:

Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente, considerándose víctima a una persona, independientemente de que se identifique, aprenda, enjuicie o condene al victimario.

Si bien la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán establece en su artículo 5, algunos derechos que tienen las víctimas y algunas medidas que deben adoptar las autoridades cuando se comete un delito, no es menos cierto que estas medidas ya no brindan una verdadera protección a las víctimas, se han vuelto algunas ineficientes, repetitivas y hasta algo obsoletas, por lo que no es ocioso reforzarlas, eficientarlas y modernizarlas, con el fin de garantizarle a las mujeres, seguridad, claridad, certeza y máxima protección cuando se encuentren en peligro.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también reconoce desde el año 2008, los derechos de las víctimas en su artículo 20, apartado C, naciendo de una reforma que se propuso en su momento y que ahora es una realidad, para proteger a las víctimas, garantizarles justicia, reparación del daño y sancionar al victimario.

Se ha observado que una de las medidas de protección que más se aplica desde hace años, es el que una patrulla vigile el domicilio de la víctima, pero se ha demostrado que esta medida ya no es suficiente, y más cuando se trata de delitos graves que ponen en riesgo la vida de las mujeres, en Yucatán han existido casos muy marcados y recordados hasta la fecha por la sociedad, casos en los que desafortunadamente las mujeres pierden la vida porque no se les protege como se debiera, y eso es lo que pretendo con esta propuesta, lograr que las mujeres obtengan una máxima protección a través de los dispositivos denominados "pulso de vida", otorgándose desde el momento que la autoridad tiene conocimiento de los hechos, sin necesidad de iniciar un proceso jurídico, sin necesidad de que su agresor este en la cárcel, porque esta medida de máxima protección que propongo vigilará de forma permanente las 24 horas del día a las mujeres que han denunciado a sus agresores.

Los tiempos cambian, las formas de agredir y delinquir también, es indispensable modernizarnos en la aplicación de herramientas que garanticen la seguridad de las mujeres yucatecas, solamente así podrán vivir una vida libre de violencia,

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS, SE ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES Y PARRAFOS DE LA LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE YUCATÁN.

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción II, X y se adiciona la fracción XVI del artículo 5 y se reforma el segundo párrafo y se adiciona un párrafo al artículo 7 y se adiciona la fracción XV del artículo 22 recorriéndose en su numeración la actual fracción XIV para pasar a ser la XV, todo de la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán, para quedar como sigue:

Texto vigente	Texto a reformar
<p>Artículo 5. Derechos de las víctimas</p> <p>Las víctimas tienen, de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes derechos:</p> <p>I. Recibir información accesible y precisa, así como la documentación necesaria para ejercer sus derechos y acceder a las medidas y los procedimientos de atención.</p> <p>II. Recibir las medidas de ayuda inmediata, de asistencia, de atención y de reparación integral a que se refiere el artículo 7, en forma oportuna, rápida, gratuita y bajo un enfoque transversal de género, intercultural y diferencial.</p> <p>III. Acceder a la justicia.</p> <p>IV. Gozar de los derechos previstos en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en el artículo 12 de la Ley General de Víctimas.</p>	<p>Artículo 5. Derechos de las víctimas</p> <p>Las víctimas tienen, de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes derechos:</p> <p>I. Recibir información accesible y precisa, así como la documentación necesaria para ejercer sus derechos y acceder a las medidas y los procedimientos de atención.</p> <p>II. Recibir las medidas de ayuda inmediata, de alojamiento, alimentación, transporte, protección, asesoría jurídica, asistencia, atención y de reparación integral a que se refiere el artículo 7, en forma eficaz, profesional, oportuna, rápida, gratuita y bajo un enfoque transversal de género, intercultural y diferencial, así como de derechos humanos y no discriminación.</p> <p>III. Acceder a la justicia.</p>

<p>V. Acceder a una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de los responsables, al esclarecimiento de los hechos y la reparación integral del daño.</p> <p>VI. Conocer la verdad histórica de los hechos constitutivos del delito o de las violaciones a los derechos humanos de que fueron objeto.</p> <p>VII. Participar en la búsqueda de la verdad de los hechos, especialmente en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, así como conocer su destino o paradero o el de sus restos.</p> <p>VIII. Ser reparadas integralmente, de manera efectiva, diferenciada y transformadora por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o de las violaciones a los derechos humanos de que fueron objeto.</p> <p>IX. Recibir protección del estado.</p> <p>X. Ser tratado con la atención y el debido respeto a su dignidad.</p> <p>XI. Ser registrado, en su caso, en el registro estatal.</p> <p>XII. Acceder, en su caso, a los recursos del fondo estatal.</p> <p>XIII. Ser localizado, en los casos de desaparición, a través de la instrumentación de protocolos de búsqueda.</p> <p>XIV. Participar en la formulación, implementación y seguimiento de la</p>	<p>IV. Gozar de los derechos previstos en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en el artículo 12 de la Ley General de Víctimas.</p> <p>V. Acceder a una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de los responsables, al esclarecimiento de los hechos y la reparación integral del daño.</p> <p>VI. Conocer la verdad histórica de los hechos constitutivos del delito o de las violaciones a los derechos humanos de que fueron objeto.</p> <p>VII. Participar en la búsqueda de la verdad de los hechos, especialmente en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, así como conocer su destino o paradero o el de sus restos.</p> <p>VIII. Ser reparadas integralmente, de manera efectiva, diferenciada y transformadora por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o de las violaciones a los derechos humanos de que fueron objeto.</p> <p>IX. Recibir protección del estado.</p> <p>X. Ser tratado con la atención y el debido respeto a su dignidad, sin discriminación de ningún tipo.</p> <p>XI. Ser registrado, en su caso, en el registro estatal.</p> <p>XII. Acceder, en su caso, a los recursos del fondo estatal.</p>
---	--

política pública en materia de atención a víctimas.

XV. Reunirse con otras víctimas para el ejercicio y defensa de sus derechos.

Artículo 7. Medidas

Las medidas de ayuda inmediata, que comprenden las de alojamiento y alimentación, de transporte, de protección y de asesoría jurídica; las de asistencia y atención, que comprenden las económicas y de desarrollo y de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia; y las medidas de reparación integral, que comprenden las de restitución, de rehabilitación, de compensación, de satisfacción y de no repetición establecidas en la Ley General de Víctimas serán otorgadas de manera gratuita y se prestarán en atención a la gravedad del daño sufrido y a las condiciones particulares de la víctima, especialmente tratándose de personas pertenecientes a grupos vulnerables como son las niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas.

Las medidas se brindarán en los términos de las reglas de operación de los programas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal o municipal.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal deberán

XIII. Ser localizado, en los casos de desaparición, a través de la instrumentación de protocolos de búsqueda.

XIV. Participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública en materia de atención a víctimas.

XV. Reunirse con otras víctimas para el ejercicio y defensa de sus derechos.

XVI. Las mujeres que sean víctimas de delitos sexuales, lesiones, violencia familiar, violencia de género, tentativa de feminicidio o cualquier delito que atente contra su integridad y su vida, se les proporcionará de forma inmediata protección máxima, que consistirá en un dispositivo en forma de reloj o dije, llamado pulso de vida, que contará con un micrófono, geolocalizador y botón de pánico, operado por el C5i de Yucatán, para salvaguardar la integridad y la vida de las mujeres de forma permanente las 24 horas del día, la adquisición de los dispositivos será a través del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que administra la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Yucatán.

Artículo 7. Medidas

Las medidas de ayuda inmediata, que comprenden las de alojamiento y alimentación, de transporte, de protección y de asesoría jurídica; las de asistencia y atención, que comprenden

instrumentar programas para proporcionar medidas de ayuda, asistencia, atención y protección, a las víctimas de tortura, con especial énfasis en aquellas que se encuentran privadas de su libertad, en términos de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Artículo 22. Atribuciones

La comisión ejecutiva, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Brindar asesoría jurídica gratuita a las víctimas que así lo soliciten, en asuntos del fuero común, a fin de garantizar sus derechos.
- II. Orientar a las víctimas para facilitar su acceso a las medidas de ayuda inmediata, de asistencia, de atención y de reparación integral.
- III. Elaborar protocolos para la implementación de las medidas a cargo de las instituciones integrantes del sistema estatal.
- IV. Procurar la reparación integral de las víctimas.
- V. Integrar, actualizar y administrar el registro estatal.
- VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen el ingreso de la víctima al registro estatal.
- VII. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio de los recursos del fondo estatal.

las económicas y de desarrollo y de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia; y las medidas de reparación integral, que comprenden las de restitución, de rehabilitación, de compensación, de satisfacción y de no repetición establecidas en la Ley General de Víctimas serán otorgadas de manera gratuita y se prestarán en atención a la gravedad del daño sufrido y a las condiciones particulares de la víctima, especialmente tratándose de personas pertenecientes a grupos vulnerables como son las niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas.

Las medidas se brindarán en los términos de las reglas de operación de los programas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal o municipal, **siempre con un enfoque de derechos humanos, no discriminación, igualdad y perspectiva de género.**

Las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal deberán instrumentar programas para proporcionar medidas de ayuda, asistencia, atención y protección, a las víctimas de tortura, con especial énfasis en aquellas que se encuentran privadas de su libertad, en términos de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o

<p>VIII. Elaborar anualmente el tabulador de montos de compensación subsidiaria.</p> <p>IX. Capacitar, formar, actualizar y especializar a los servidores públicos en materia de atención a víctimas.</p> <p>X. Realizar diagnósticos que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas.</p> <p>XI. Brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de las víctimas, priorizando aquéllas que tengan condiciones precarias de desarrollo y marginación.</p> <p>XII. Implementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que permitan supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia de víctimas.</p> <p>XIII. Brindar capacitación a los asesores jurídicos en materias relacionadas con la atención y protección de víctimas.</p> <p>XIV. Las demás que establezcan esta ley; la Ley General de Víctimas; la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Código de la Administración Pública de Yucatán, su reglamento y el estatuto orgánico.</p>	<p>Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.</p> <p>Cuando se trate de delitos sexuales, lesiones, violencia familiar, violencia de género, tentativa de feminicidio o cualquier otro delito que ponga en riesgo la integridad y la vida de las mujeres, se aplicará protección máxima por parte de las autoridades, que consistirá en un dispositivo en forma de reloj o dije, llamado “pulso de vida”, que contará con un micrófono, geolocalizador y botón de pánico, operado por el C5i de Yucatán, para salvaguardar la integridad y la vida de las mujeres de forma permanente las 24 horas del día, sin importar en qué etapa del proceso jurídico se encuentre o si el agresor se encuentra en la cárcel, se realizará desde el momento en que la autoridad tenga conocimiento de los hechos cometidos contra la víctima.</p> <p>Artículo 22. Atribuciones La comisión ejecutiva, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones:</p> <p>I. Brindar asesoría jurídica gratuita a las víctimas que así lo soliciten, en asuntos del fuero común, a fin de garantizar sus derechos.</p> <p>II. Orientar a las víctimas para facilitar su acceso a las medidas de ayuda inmediata, de asistencia, de atención y de reparación integral.</p> <p>III. Elaborar protocolos para la implementación de las medidas a cargo</p>
---	---

	<p>de las instituciones integrantes del sistema estatal.</p> <p>IV. Procurar la reparación integral de las víctimas.</p> <p>V. Integrar, actualizar y administrar el registro estatal.</p> <p>VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen el ingreso de la víctima al registro estatal.</p> <p>VII. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio de los recursos del fondo estatal.</p> <p>VIII. Elaborar anualmente el tabulador de montos de compensación subsidiaria.</p> <p>IX. Capacitar, formar, actualizar y especializar a los servidores públicos en materia de atención a víctimas.</p> <p>X. Realizar diagnósticos que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas.</p> <p>XI. Brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de las víctimas, priorizando aquellas que tengan condiciones precarias de desarrollo y marginación.</p> <p>XII. Implementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que permitan supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia de víctimas.</p> <p>XIII. Brindar capacitación a los asesores jurídicos en materias relacionadas con la atención y protección de víctimas.</p> <p>XIV. Aplicarán protección máxima a mujeres cuando se trate de delitos sexuales, lesiones, violencia</p>
--	--

	<p>familiar, violencia de género, tentativa de feminicidio o cualquier otro delito que ponga en riesgo su integridad o su vida, adquiriendo a través del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, dispositivos tecnológicos en forma de reloj o dije, llamados “pulso de vida”, que contará con un micrófono, geolocalizador y botón de pánico, operado por el C5i de Yucatán las 24 horas del día, sin importar en qué etapa del proceso jurídico se esté o si el agresor se encuentra en la cárcel, se realizará desde el momento en que la autoridad tenga conocimiento de los hechos cometidos contra la víctima</p> <p>XV. Las demás que establezcan esta ley; la Ley General de Víctimas; la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Código de la Administración Pública de Yucatán, su reglamento y el estatuto orgánico.</p>
--	--

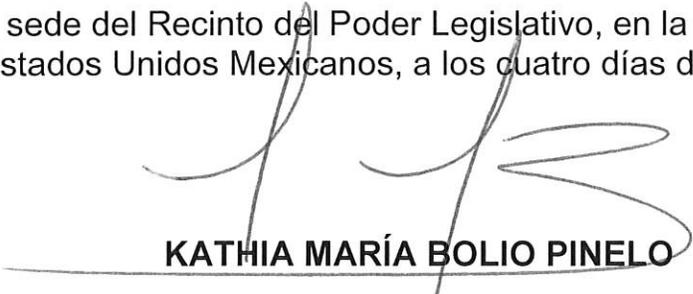
TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del Estado de Yucatán.

Segundo. La adquisición de los dispositivos de máxima protección denominados “pulso de vida”, se contemplarán dentro del próximo Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, en el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que administra la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Yucatán.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales de igual o menor jerarquía que se opongan a las disposiciones de este decreto.

Dado en la sede del Recinto del Poder Legislativo, en la ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los cuatro días del mes de marzo de 2021.



KATHIA MARÍA BOLIO PINELO

DIPUTADA